



## **NUE 1-DDP-2021 (DH)**

**XXXXXXXXXXXXX contra Martínez Salazar y Flores Cisneros**

### **Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las once horas con trece minutos del uno de noviembre de dos mil veintiuno.

#### ***A. Descripción del caso:***

I. El 4 de enero de 2021, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en adelante “el denunciante” presentó vía electrónica, escrito de denuncia en contra de **José Antonio Martínez Salazar**, Alcalde de la Municipalidad de Zaragoza, y **Ricardo Starlin Flores Cisneros**, Secretario Municipal de Zaragoza –ambos ejerciendo dichos cargos a la fecha de la interposición de la denuncia-, en adelante “los denunciados”, por la supuesta comisión de la conducta descrita en el Art. 76 letra “a” de la sección de infracciones muy graves a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) correspondiente a: *“Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”*.

El hecho sobre el que se basó la denuncia interpuesta por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** acontece como consecuencia del procedimiento de apelación con referencia NUE 24-ADP-2020 (CE) donde este Instituto resolvió en fecha 10 de agosto de 2020, en lo medular: *“Ordenar a la Municipalidad de Zaragoza que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, realice una nueva búsqueda de la documentación consistente en: “fotocopia de contrato firmado en mayo de 2018 a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX”*, lo cual, a la fecha únicamente ha significado por parte de la referida Municipalidad, la declaratoria de inexistencia del contrato de trabajo del denunciante el cual se afirma fue firmado en mayo de 2018.

Ante ello, el denunciante señaló que los presuntos infractores han incurrido en la conducta descrita en el Art. 76 letra “a” de la sección de infracciones muy graves a la LAIP por destruir o tratar de ocultar su contrato de trabajo de mayo de 2018.

**II.** En ese contexto, este Instituto admitió la denuncia y asignó el caso a la comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. No obstante, el veintitrés de abril del presente año, este Instituto fue notificado de la resolución dictada a las doce horas del dieciséis de abril del corriente, por la Presidencia de la República (PR) mediante la cual, entre cosas, se ordenó la suspensión inmediata del cargo a la comisionada Escobar Campos, a partir de la notificación del referido acto.

En tal sentido, este caso fue reasignado a la comisionada Daniella Huevo Santos, quien se encuentra en funciones por parte del Sector de los Sindicatos, a partir del 6 de mayo de los corrientes, para la instrucción y elaboración del respectivo proyecto de resolución del caso.

En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, se corrió traslado a los denunciados para que rindieran su informe.

En su informe de defensa, rendido a través de su apoderada Zoila Clara Guadalupe Solís Barrera, se realizaron las consideraciones siguientes: a) que la contratación que alega el denunciante se realizó vía Acuerdo Administrativo número tres, de fecha nueve de mayo de 2018; b) que dicho Acuerdo se encuentra agregado al expediente administrativo llevado por Instituto, en el proceso de apelación de referencia NUE 24-ADP-2020 (CE) abierto en razón de la solicitud de información realizada por el hoy denunciante ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Municipalidad; c) que la existencia de preceptos jurídicos dentro del presente procedimiento demuestran que no se han cometido infracciones a la norma, por lo que, no se les puede atribuir la comisión de una infracción sobre un documento que nunca existió.

**III.** La audiencia oral, se desarrolló con la comparecencia del denunciado, del mismo modo se hizo constar la incomparecencia de los denunciados pese haberles realizado las debidas notificaciones en legal tiempo y forma tanto a los medios electrónicos dispuestos en el portal de transparencia de la Municipalidad, como a los dispuestos por la representación de ambos dentro del respectivo informe de defensa. Dicha audiencia se celebró a través de la plataforma *meet* de google, ello en cumplimiento a los fines de la LAIP de conformidad a su Art. 3 letra “g”, el cual establece la promoción del uso de las tecnologías de la información, comunicación y la implementación del gobierno electrónico que tiene como objetivo el uso del internet, las redes sociales o las páginas web.

En etapa probatoria, el denunciante ofertó el testimonio de César Edgardo López Guzmán, ex Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Zaragoza, argumentando la utilidad y pertinencia de dicha prueba testimonial; acto seguido, el Pleno de este Instituto deliberó admitiendo la prueba ofertada, posteriormente se procedió a juramentar al testigo ofertado de conformidad a las reglas dispuestas en los Arts.305 del Código Penal (CP), 366 y 367 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM). Luego de ello, se procedió a practicar el interrogatorio por parte del denunciante a su testigo a modo de comprobar la comisión de la conducta atribuida a los denunciados.

En el interrogatorio, el denunciante realizó la siguiente pregunta “¿Señor López, como ex jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Zaragoza, puede decirnos si ingresó una nueva planilla de empleados en 2018 en el mes de mayo?” contestando de manera afirmativa el testigo, posteriormente se interrogó “¿Señor López, usted sabe si se elaboraron contratos para el personal contratado en mayo de 2018” contestando el testigo que tuvo conocimiento que sí se elaboraron contratos, no obstante él nunca tuvo acceso a los mismos, únicamente a nombramientos a través de Acuerdos administrativos del

Concejo Municipal de Zaragoza, extendiéndose el testigo y resultando redundante su contestación. Culminando con ello el respectivo interrogatorio.

Posteriormente, en la etapa de alegatos el denunciante argumentó que se tenía por configurada la conducta atribuida a los denunciados, en razón a que él firmó un contrato de prueba por el período de tres meses en el mes de mayo del dos mil dieciocho. Luego de ello, se procedió a la etapa de consultas aclaratorias por parte de los comisionados y comisionadas de esta Administración, consultando la comisionada Daniella Huevo Santos, si el denunciante contaba con el Acuerdo Administrativo número 3, de fecha 9 de mayo de 2018 emitido por el Concejo Municipal de Zaragoza, afirmándose dicho hecho. Culminando con ello la etapa de audiencia oral y quedando habilitado este Pleno para emitir una resolución definitiva.

#### ***B. Análisis del caso.***

Una vez establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** potestad sancionadora del Estado y del principio de legalidad, como principios que rigen el ejercicio de dicha facultad por parte de este Instituto; **(II)** breves consideraciones sobre la infracción muy grave consistente en “*sustraer, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que se encuentra bajo su custodia o a la que tiene acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión*”; **(III)** valoración y análisis de los elementos probatorios ofrecidos en el presente procedimiento; y **(IV)** determinación si las actuaciones de los denunciados encajan en la comisión de la infracción objeto de la causa, conforme a los hechos probados.

**I.** La potestad sancionadora del Estado, es conocida como *ius puniendi*, y concebida como la capacidad estatal de ejercer un control social coercitivo sobre actos ilícitos. Esta potestad se despliega, por una parte, en la rama del Derecho Penal —potestad penal judicial— y, por otra, en la Administración Pública. Esta materialización del *ius puniendi* en el campo administrativo se denomina potestad sancionadora de la Administración.

La principal justificación de la potestad sancionadora, ejercida por entes administrativos, atiende a razones pragmáticas, pues es necesaria para el cumplimiento de la finalidad última de la administración: “garantizar el mantenimiento del propio orden jurídico, el de la sociedad en conjunto, y el de la misma administración mediante la represión de todas aquellas conductas contrarias al mismo”. (Fallo: Sala de lo Contencioso Administrativo: 149-M-99, 19/12/2000).

Asimismo, la actividad de los administrados es controlada y seguida por la Administración Pública por medio de técnicas permitidas y justificadas por la posibilidad de tutelar los intereses sociales, de ahí que pueda imponer sanciones administrativas, puniendo actitudes lesivas —acciones u omisiones— a la esfera jurídica de los administrados.

Es dable resaltar el efecto disuasivo que la sanción, al igual que la pena en el ámbito penal, trae aparejada para el infractor de una norma. En ese sentido, a través de la corrección de conductas al margen de la ley —que pueden ocasionar consecuencias perniciosas a los beneficiados por esta— se pretende reorientar actitudes que desde un inicio se perfilaban arbitrarias, a caminos iluminados por la legalidad, como el restablecimiento de la seguridad jurídica.

Así, sobre la base del Art. 14 de la Constitución de la República con relación al 58 letra “e” de la LAIP, este Instituto puede intervenir punitivamente en la esfera jurídica de los servidores públicos que provoquen una lesión o daño a los derechos que garantiza la mencionada ley, considerados estos como derechos fundamentales de los administrados, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones plausibles acreedoras de una sanción de carácter pecuniario.

Dentro de esta potestad administrativa sancionadora, se encuentran fijados fines y principios que deben regir la valoración de los hechos e interpretación de las normas. Entre estos principios se encuentran: el principio de legalidad, lesividad del bien jurídico,

culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento, que en doctrina se han denominado como el programa penal de la Constitución.

La jurisprudencia constitucional de nuestro país, establece que el principio de legalidad en el ámbito sancionador, constituye una exigencia de seguridad jurídica que no solo requiere el conocimiento previo de los delitos o infracciones y de las penas o sanciones, sino que también constituye una garantía política hacia el individuo de que no puede ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido establecidas previamente, evitando así los abusos de poder. (Sentencia: Sala de lo Constitucional, Proceso de Amparo de referencia 117-2003, 15/06/2004).

Es así, que el mencionado principio trae aparejadas implicaciones para la elaboración, interpretación y aplicación de la LAIP, en el sentido de que establece condiciones para la imposición de sanciones por infracciones a la Ley, tales como: i) que una ley describa la infracción y su punición; ii) que la ley no sea anterior al hecho; iii) que la ley sea precisa en su lenguaje descriptivo con relación a la construcción de la infracción y precisa en el lenguaje normativo de las consecuencias que resulten de su comisión; y, iv) que se evite comprender supuestos que no se enmarquen dentro de su tenor.

**II.** Resulta oportuno realizar un análisis sobre las infracciones que se les atribuye a los denunciados.

La infracción atribuida a los denunciados corresponde a la tipificada en la letra “a” del apartado de infracciones “muy graves” a la LAIP del Art. 76 de la LAIP consistente en: *“Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar total o parcialmente, información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”*; es pues, pertinente conocer el significado de los verbos rectores; entendiéndose como sustraer como la acción de apartar, separar, extraer<sup>1</sup>; destruir

---

<sup>1</sup>Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consultado en: <https://dle.rae.es/sustraer> el 17 de abril de 2015.

se puede entender cómo reducir a pedazos o a cenizas algo material, u ocasionar un grave daño<sup>2</sup>; e inutilizar entendida como hacer inútil, vano o nulo algo<sup>3</sup>.

Para el caso en estudio, cobra especial relevancia analizar los verbos rectores correspondientes a *ocultar* y *alterar* la información; de tal forma, atendiendo al sentido común de las palabras por ocultar puede entenderse esconder, tapar, disfrazar o encubrir algo a la vista<sup>4</sup>; mientras que por alterar puede entenderse cambiar la esencia o forma de algo<sup>5</sup>.

Por otra parte se advierte que la infracción aludida, en su descripción típica, hace referencia a la información que obra en poder de los entes obligados o a la que tengan acceso los sujetos descritos, y no, necesariamente, a los documentos que la contienen, por lo que debe diferenciarse entre esos dos supuestos, por una parte que el concepto de información describe un elemento incorpóreo, relativo al conocimiento; mientras que el concepto de documento hace referencia al objeto material donde se asienta y se registra la información, en términos más sencillos el documento es el medio físico tangible y la información es el contenido<sup>6</sup>.

En este orden de ideas, cabe señalar que el legislador decidió proteger la información como elemento inmaterial, de tal forma que la infracción puede ser cometida cuando cualquiera de las acciones típicas descritas sea dirigida contra la información misma.

**III.** En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes; es decir, constituye una actividad a instancia de parte que tiene como finalidad la comprobación de los hechos controvertidos en el litigio; y

---

<sup>2</sup>Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consultado en: <https://dle.rae.es/destruir?m=form> el 17 de abril de 2015.

<sup>3</sup>Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consultado en: <https://dle.rae.es/inutilizar?m=form> el 17 de abril de 2015.

<sup>4</sup>Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consultado en: <http://lema.rae.es/drae/?val=ocultar%2B>. el 17 de abril de 2015.

<sup>5</sup>Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consultado en: <http://lema.rae.es/drae/?val=alterar>. el 17 de abril de 2015.

<sup>6</sup> LAVALLE, D. Derecho de Acceso a la Información Pública, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 17.

es contemplada en el derecho común como un derecho y a la vez como una carga. La prueba es, sin duda alguna, una actividad desplegada en un procedimiento que tiene por finalidad llevar el ánimo de la autoridad decisoria la convicción de certeza sobre un hecho determinado<sup>7</sup>.

La prueba, de igual forma, se encuentra regida por los principios de pertinencia, idoneidad, o contundencia y utilidad. Estos principios representan una limitación al principio de libertad de la prueba; sin embargo son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan, en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente impertinentes.

En ese contexto, el CPCM, de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme al Art. 102 de la LAIP, contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y utilidad. En cuanto a la pertinencia el Art. 318 del CPCM, establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el Art. 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Para este caso en particular, si bien los denunciados, a través de su apoderada, ofertaron distintos medios de prueba documental, los mismos no se apersonaron a la audiencia oral correspondiente al presente procedimiento, por lo cual la misma no será objeto de estudio ni valoración alguna.

Por su lado, el día de la celebración de la audiencia oral, el denunciante ofertó la prueba testimonial de César Edgardo López Guzmán, ex Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Zaragoza, manifestando la utilidad y pertinencia de dicha prueba, por lo que una vez admitida dicho testimonio, el denunciante procedió a realizar un interrogatorio

---

<sup>7</sup> Garberí Llobregat, José y Buitrón Ramírez Guadalupe, El Procedimiento Administrativo Sancionador, Volumen I, cuarta edición ampliada y actualizada, pág 279, 2001.



directo en aras a ser la única parte compareciente dentro del procedimiento, no obstante las preguntas realizadas por el denunciado, a consideración de este Pleno, resultaron sugestivas y conducentes a una respuesta en particular, a su vez, de acuerdo a las reglas previstas en el art. 348 del CPCM respecto del interrogatorio en audiencia el cual señala que *“Las preguntas se formularán oralmente, con la debida claridad y precisión, y se evitará que contengan valoraciones, sugerencias, calificaciones o cualquier otra clase de indicación o comentario que pueda dirigir la contestación.”*, lo cual inhibe que esta Administración pueda realizar una valoración íntegra exclusivamente de este elemento probatorio en aras a que la dirección de las respuestas resultaron ajenas a las técnicas de interrogación aceptadas por el legislador.

Por su lado, resulta necesario valorar la documentación que conforma al expediente de este procedimiento. En este punto, hay que recordar que el presente caso deviene como consecuencia del expediente con referencia NUE 24-ADP-2020 (CE) donde este Instituto resolvió en fecha 10 de agosto de 2020: *“Ordenar a la Municipalidad de Zaragoza que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, realice una nueva búsqueda de la documentación consistente en: “fotocopia de contrato firmado en mayo de 2018 a favor de XXXXXXXXXXXXX”*, el hecho particular que reviste este procedimiento sancionador es la forma de contratación del ahora denunciante, dado que el mismo alega haber firmado un contrato de prueba por el período de 3 meses en el mes de mayo de 2018, y que su ingreso a la labor administrativa tuvo como consenso la firma de una fuente de obligaciones como lo es un contrato.

No obstante, en el expediente administrativo de referencia UAIP-A-0003-AMZ-2020 —el cual fue remitido a este Instituto por parte de la Municipalidad de Zaragoza durante la tramitación del procedimiento NUE 24-ADP-2020 (CE)- se logra evidenciar que a fs. 14, yace incorporado el Acuerdo Administrativo número 3, de fecha 9 de mayo de 2018, en donde el Concejo Municipal de Zaragoza acuerda la incorporación del ahora denunciante para la realización del período de prueba de 3 meses dentro de dicha Administración. Por lo que dicho Acuerdo, como documento fehaciente de

la labor de la Administración Pública –en este caso la Municipalidad de Zaragoza– constituye un medio físico a través del cual se formalizó la relación laboral de la Municipalidad con el ahora denunciante.

Al respecto, cabe aclarar que la decisión adoptada por este Pleno dentro del procedimiento con referencia NUE 24-ADP-2020 (CE) fue la de garantizar el derecho a la autodeterminación informativa en su faceta de protección de información personal del ahora denunciante; puesto que se ordenó la realización de labores encaminadas a la localización de documentación requerida por su persona. Lo anterior, debido a que dicho procedimiento no se aportaron elementos que permitieran inferir la suscripción de un contrato entre el denunciante y la Municipalidad de Zaragoza.

**IV.** Ahora bien, resulta pertinente verificar si la conducta de los denunciados se adecúa a la atribuida en esta ocasión.

La Sala de lo Contencioso Administrativo reconoce la máxima de una responsabilidad por hechos propios y de forma correlativa un deber procesal de la Administración de evidenciar este aspecto subjetivo sin tener que utilizar presunciones legislativas de culpabilidad, es decir, que veda la posibilidad de una aplicación automática de las sanciones únicamente en razón del resultado producido.

Respecto de la directriz de culpabilidad<sup>8</sup> en materia sancionadora, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado: *“el principio de responsabilidad en esta materia supone el destierro de diversas formas de responsabilidad objetiva y rescata la operatividad del dolo y la culpa como formas de responsabilidad”*. Lo anterior, implica que la sanción únicamente puede recaer en quién de forma dolosa o culposa ha participado en la acción que se configura en el tipo.

El análisis plasmado en el párrafo precedente se encuentra establecido en el art. 139 de la LPA: *“el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, además*

---

<sup>8</sup> Resolución emitida el 7 de marzo de 2018, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de referencia 165-2015.

*de lo establecido en el Título I de esta Ley, estará sujeto a los siguientes principios: 5. Responsabilidad: sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley*”. Es decir, que al momento de emitir un pronunciamiento de fondo en el marco de un procedimiento administrativo sancionador es imperante valorar el dolo, culpa o negligencia que produjeron la infracción.

En ese sentido, en concreto debe indicarse que en este procedimiento no quedó probado que existió un contrato laboral entre la Municipalidad de Zaragoza y el denunciante, firmado en mayo de 2018, por lo que, no es posible establecer un nexo causal-a título de dolo o culpa- entre la infracción denunciada y el supuesto actuar de parte de los denunciados, en tanto, un presupuesto necesario para la configuración del tipo establecido en el art. 76 letra a, del apartado de las infracciones muy graves de la LAIP, es que la información exista y además, que la persona denunciada que la custodie o tenga acceso a la misma, haya participado o realizado actos en detrimento de esta o encaminados a impedir su acceso.

Y es que, en materia administrativa sancionadora no basta atribuir a un sujeto la comisión de una conducta típica y antijurídica regulada así por una norma administrativa, sino que, además, debe establecerse y delimitarse el elemento subjetivo de culpabilidad, el cual, requiere la existencia de un nexo causal entre los hechos denunciados y el actuar cometido por el presunto responsable. Cabe además, señalar que tales presupuestos no pueden ser asumidos sino que deben ser constatados por la Administración a través de diferentes elementos aportados por las partes o requeridos por la Administración cuando lo considere oportuno conforme a las facultades legalmente conferidas.

De manera que, resulta pertinente absolver a los denunciados de la conducta que les fue atribuida, en razón que, únicamente quedó probado la existencia de un Acuerdo Administrativo emitido por una Administración Pública en el uso de sus facultades regladas y discrecionales, por medio del cual se formalizó la relación laboral del denunciante y la referida Municipalidad y no la suscripción de un contrato, como una de las formas de

ingreso al servicio civil de acuerdo a la legislación pertinente y por ende, tampoco su alteración u ocultamiento por parte de los mismo en su calidad empleados públicos.

El argumento anterior, se encuentra en consonancia con el pronunciamiento dado por Instituto en la resolución con referencia NUE 24-ADP-2020 (DH) en donde se ordenó una nueva búsqueda de la información del contrato solicitado por el apelante, debido a que durante su tramitación como en este caso no se probó su existencia.

En suma, con base a los hechos probados y los argumentos esgrimidos en esta resolución, se tiene por no configurada la conducta atribuida a **José Antonio Martínez Salazar**, Alcalde de la Municipalidad de Zaragoza, y **Ricardo Starlin Flores Cisneros**, Secretario Municipal de Zaragoza –ambos ejerciendo dichos cargos a la fecha de la interposición de la denuncia- por lo que, este Instituto deberá manifestar su voluntad en el sentido de absolver a los denunciados por la conducta atribuida y de la cual ha quedado evidencia que no se cometió.

### ***C. Decisión del caso***

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base en los Arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3°, 58 letra “e” 96 y 102 de la LAIP; 78, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP; y, 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto resuelve:

**a) Declarar** que **José Antonio Martínez Salazar**, Alcalde de la Municipalidad de Zaragoza, y **Ricardo Starlin Flores Cisneros**, Secretario Municipal de Zaragoza –ambos ejerciendo dichos cargos a la fecha de la interposición de la denuncia-, no han incurrido en la infracción señalada en el Art. 76 letra “a” de la sección de infracciones muy graves de la LAIP.

**b) Absolver** a **José Antonio Martínez Salazar**, y **Ricardo Starlin Flores Cisneros**, en su calidad de denunciados por el presunto incumplimiento de la LAIP al atribuirseles “*Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente,*

*información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión” según lo establece el Art. 76 letra “a” de la sección de infracciones “muy graves” de la LAIP.*

**c) Hacer saber** a las partes que en contra de este acto administrativo cabe el recurso de reconsideración; sin embargo, pueden directamente acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa si así consideran necesario. De presentar el recurso de reconsideración este no suspende el plazo establecido en el Art. 25 literal “a” de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

**d) Publíquese** esta resolución, oportunamente.

**e) Archivar** definitivamente este expediente una vez esta resolución adquiera estado de firmeza.

***Notifíquese.-***

**PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS Y LA COMISIONADA QUE LA SUSCRIBEN.**

CS/CT